LIBERTAD DE OPINIÓN E INFORMACIÓN: ALGUNOS TÓPICOS INTERESANTES EN LA JURISPRUDENCIA CHILENA

FREEDOM OF SPEECH AND INFORMATION: SOME INTERESTING TOPICS IN CHILEAN JURISPRUDENCE

IGNACIO COVARRUBIAS CUEVAS¹

Resumen: la presente colaboración persigue destacar, a partir de ciertos hitos jurisprudenciales, algunos criterios no habitualmente subrayados con ocasión del tratamiento de este derecho fundamental.

Palabras clave: libertad de opinión y de información. Jurisprudencia en Chile.

Summary: this article (collaboration) seeks to point out from certain jurisprudential landmarks, some non traditional criteriums underlined when dealing with this fundamental wright.

Key words: freedom of speech and information. Jurisprudence in Chile.

¹ Doctor en Derecho, Universidad de los Andes; Magíster en Derecho Público, Pontificia Universidad Católica de Chile; Licenciado en Derecho, Universidad Finis Terrae; profesor de Derecho constitucional e investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. El presente artículo es una versión modificada de un trabajo previo, titulado “Libertad de información y derecho a la vida privada: la perspectiva jurisprudencial chilena”, en Rodríguez Pardo, Julián (2008) (coord.), *Derecho de la Información. Una perspectiva comparada de España e Iberoamérica*. Madrid: Editorial Dykinson-Universidad de Extremadura, pp. 119-149.

I. INTRODUCCIÓN

Teniendo en consideración la libertad que brinda el amplio paraguas temático de este derecho, y atendida la naturaleza colectiva de la obra en la cual este artículo forma parte, hemos querido destacar algunos aportes en el desarrollo jurisprudencial de la libertad de expresión en Chile, tarea aunque preferentemente descriptiva, no excluye la posibilidad de aportar algunas notas valorativas en relación a algunos tópicos vinculados al ejercicio de esta libertad. La discrecionalidad en la elección de estos temas no obedece sino al propósito de ilustrar —con ocasión de alguna jurisprudencia nacional— algunos criterios no coincidentes, en general, con aquellos actualmente en boga y que han sido en ocasiones sustentados por parte de la doctrina como por la jurisprudencia judicial comparada.

No hay una pretensión de desarrollar un trabajo omnicompreensivo, ni mucho menos exhaustivo, de los títulos que se abordarán. Sólo pretende entregar un panorama general y sintético acerca de algunos de los temas más frecuentemente abordados por el Derecho Constitucional y el Derecho a la Información, con indicación de los casos jurisprudenciales más difundidos sobre diversos temas de esta disciplina, aunque con un somero análisis de uno de los tópicos que, a juicio del autor, resultan más relevantes.

II. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES COMPLEMENTARIAS AL DERECHO DE EMITIR OPINIÓN E INFORMACIÓN

Existen una serie de normas contenidas en la disposición constitucional de artículo 19 N°12, que no obstante exceder con mucho lo estrictamente referido al contenido mismo del derecho de libertad de emitir opinión e información, podrían de todos modos ser admitidas como garantías complementarias al derecho en cuestión. Por ejemplo, un modo de favorecer la pluralidad de medios existentes en el mercado para ejercer la libertad de expresión está contenida en dos disposiciones que establecen una prohibición al Estado para erigirse en comunicador social monopólico².

² Constitución Política de la República, artículo 19 N° 12, inciso 2: “la ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”.

Vinculado a ello, otro inciso de la misma norma dispone el derecho de fundar empresas informativas de diarios, revistas y periódicos³. ¿Cómo se explica que la Carta Fundamental haya reconocido un derecho de esta naturaleza en circunstancias que el mismo texto constitucional consagra la libertad económica y de asociación? Se entiende debido a que este derecho a fundar empresas informativas no se hace extensible a los medios de televisión, aspecto este que mereció el tratamiento particular en otro inciso de la misma norma constitucional.

En efecto, el inciso quinto dispone: “El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión en conformidad a la ley”, norma que precisó que sólo “podrán ser titulares de una concesión de servicio de radiodifusión televisiva de libre recepción (...) las personas jurídicas de derecho público o privado, constituidas en Chile y con domicilio en el país”⁴. En virtud de ello, la disposición contenida en la denominada Ley de Prensa que reconoce el derecho de toda persona para “fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social”⁵, debe entenderse incorporada con las limitaciones ya indicadas —en una ley anterior, pero especial— respecto de los medios de televisión. Por otra parte, la Constitución abre la posibilidad —en lo tocante a la televisión— para que operadores particulares ingresen en la operación de estaciones de televisión, ámbito, hasta la vigencia de la normativa constitucional anterior, sólo restringido al Estado y a ciertas universidades.

Sólo resta mencionar otros tres incisos de la norma constitucional del artículo 19 N° 12 que no dicen relación con el contenido del derecho de libre opinión e información. El inciso 6° crea un Consejo Nacional de Televisión, cuyas atribuciones y funciones quedan entregadas a la dictación de una ley. El inciso 7° dispone que la “ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica”. Por último, la más importante, reconoce lo que la doctrina denomina como derecho de declaración o rectificación respecto a quienes han sido ofendidos o injustamente aludidos por algún medio de comunicación, en cuyo caso

³ *Ibidem*, artículo 19 N° 12, inciso 4: “Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley”.

⁴ Ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, artículo 18, inciso 1.

⁵ Ley N° 19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, artículo 1, inciso 2.

tienen derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”⁶.

III. LA LIBERTAD DE EMITIR OPINIÓN Y DE INFORMAR

La norma constitucional del artículo 19 N° 12, inciso 1, asegura a todas las personas “La libertad de emitir opinión y de informar; sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.

1. “La libertad de emitir opinión y de informar”

Los antecedentes de la aprobación de esta norma en una de las comisiones redactoras de la Constitución⁷, exhiben que para la elaboración de la misma se tuvo en vista el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948⁸.

Esta disposición constitucional, en lo sustantivo, recoge la distinción conceptual que existe entre opinión e información. Esta distinción supone que los contenidos del pensamiento, exteriorizados a través del lenguaje, son igualmente diversos. En cuanto a la libertad de emitir opinión, se recogió la definición que ya había sido adoptada por el profesor José Luis Cea, quien la concibió como la más amplia de las libertades intelectuales, consistente en la “facultad que tiene toda persona de exteriorizar, por cualquier medio y sin coacción, lo que piensa o cree”⁹, esto es, de emitir juicios (subjetivos) acerca de algo¹⁰. La opinión supone dar un punto de

⁶ La regulación de este derecho está contenido en el Título IV *Del Derecho de Aclaración y de Rectificación*, de la Ley N° 19.733.

⁷ Actas Oficiales de la *Comisión de Estudio de la Nueva Constitución*, sesión 227.

⁸ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), artículo 19: “*Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de buscar, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, las informaciones y las ideas por cualquier medio de expresión*”.

⁹ Cea Egaña, José Luis (1976). *La libertad de opinión y el derecho a la información*. Santiago: mimeo, segunda edición, p. 1.

¹⁰ Humberto Nogueira Alcalá, en similar sentido, define la libertad de opinión como la facultad de que disponen las personas para expresar por cualquier medio, sin censura previa, su

vista acerca de algo que resulta dudoso, de tópicos respecto de los cuales no puede predicarse su carácter axiomático o irrefutable¹¹. De ahí la diferencia entre quien emite una opinión y el que dictamina con certeza¹².

El hombre junto con ser alguien pensante —en cuya virtud se le reconocen determinados derechos que tutelan las facultades del intelecto¹³— tiene vocación para comunicar sus pensamientos y opiniones. Las ventajas de este derecho a exteriorizar lo que de otro modo permanece en el fuero interno resultan evidentes¹⁴, aunque poco o nada se dice respecto de sus peligros, toda vez que existe, asimismo, el derecho a no ser lesionado injustamente por causa del contenido de nuestras expresiones, por lo que no todo lo que se dice constituye siempre, por el solo hecho de estar contenido a través del lenguaje, una libertad protegida por la libertad de expresión. El ejercicio legítimo de un derecho no puede consistir en la lesión de otro derecho.

La libertad de informar, por el contrario, consiste en sostener la existencia de hechos o acontecimientos, con independencia de la opinión o parecer que se tenga de tales sucesos. De ahí que sea exigible un mayor grado de veracidad (objetividad) en la entrega de información que en la emisión de una opinión. Como ha dicho el Tribunal Supremo Norteamericano, “no hay opiniones falsas o verdaderas”¹⁵.

universo moral, cognoscitivo y simbólico: lo que creen, piensan, saben o sienten, a través de ideas y juicios de valor, los que son por su naturaleza, de carácter subjetivo, pudiendo además difundir e intercambiar dichas ideas y debatirlas con otras personas. Nogueira Alcalá, Humberto (2002). *El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites*. Santiago: Lexis Nexis, p. 18.

¹¹ Barry, Brian (1965). *Political Argument*. London: Routledge & Kegan Paul, pp. 141-145.

¹² La opinión puede ser errada o acertada, liviana o profunda, agradable o desagradable, informada o errónea, pero nunca lesiva de otro derecho en su esencia. Al poseer una dimensión en buen grado subjetiva, no puede quedar sometida a una prueba o examen de veracidad, puesto que no puede haber opiniones verdaderas o falsas. Tal exigencia de veracidad sólo es exigible respecto de apreciaciones o descripciones sobre hechos.

¹³ Las libertades de conciencia, de educación y de intimidad constituyen ejemplos claros de derechos que nutren o pueden, potencialmente, formar el intelecto, con un fin predeterminado.

¹⁴ Aristóteles, *Política*, I, 1253, afirmaba que “la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto”, para diferenciarla de la voz. Las ventajas fueron evidenciadas por Stuart Mill, quien manifestó a *contrario sensu* que el “daño peculiar de acallar la expresión de una opinión consiste en despojar a la raza humana, tanto a las generaciones futuras como a la existente, y más aún a los que no participan de esa opinión que a los que la aceptan”, en Mill, John Stuart (1991). *Sobre la libertad*. México: Gernika, p. 31.

¹⁵ Gertz V. Robert Welch, 418 U.S. 323,339-340 (1974).

Aunque la norma constitucional no contiene de modo explícito la obligación de entregar informaciones veraces, se ha entendido implícitamente que la exigencia de veracidad en la información no supone la entrega de verdades irrefutables por parte de las empresas informativas sino que el grado de diligencia en la realización de su actividad. El profesional de la información debe en tal sentido efectuar una razonable comprobación de la información, chequearla y corroborarla con fuentes diversas a las que se haya accedido al momento de redactar columnas, reportear notas informativas o entregar artículos de opinión respecto de la información entregada¹⁶.

Pero, ¿la libertad de informar de la prensa tiene como contrapartida el derecho a exigir la entrega de la misma? Sin perjuicio de que la denominada Ley de Prensa consagra en su artículo 1º que el ejercicio de la libertad de emitir opinión y la de informar incluye “buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio”, no existe *strictu sensu* un derecho a recibir información en el sentido de gozar de una facultad para (a) imponer a los medios de comunicación social la obligación de informar sobre los temas que nos interesan o que estimamos de relevancia pública, ni para (b) suponer la existencia de un derecho —genérico— a conocer información pública.

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo, al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley de Prensa, que si bien el derecho a recibir información “*se encuentra implícito en la libertad de opinión y de informar porque de nada sirven estas libertades si ellas no tienen destinatarios reales*”¹⁷, al mismo tiempo afirmó que aunque no objetaba la constitucionalidad de la norma de la Ley de Prensa que consagraba un “*derecho a recibir información*” lo hacía “*solamente en el entendido que el derecho establecido en el proyecto de ley para que las personas reciban información, se refiere a que, proporcionadas por los medios de comunicación, nace el derecho. Ello no significa en ningún caso que se pueda obligar a una persona o a algún medio a entregar determinadas informaciones*”¹⁸.

¹⁶ Anguita Ramírez, Pedro (2005). *El derecho a la información en Chile: análisis de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (Ley de Prensa)*. Santiago: Lexis Nexis, p. 25.

¹⁷ Sentencia Tribunal Constitucional, Rol 226, 30 de octubre de 1995, c. 19.

¹⁸ *Ibíd*em, c. 21.

Lo que sí se ha reconocido en virtud del principio constitucional a la publicidad de los órganos del Estado es el derecho a la información¹⁹ como facultad para exigir la entrega de “los fundamentos y los procedimientos” sobre “los actos y resoluciones de los órganos del Estado”, salvo “cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”²⁰. La Constitución previó, asimismo, que sólo una ley de quórum calificado establecería la reserva o secreto de las citadas actuaciones públicas.

Así, y dado que la Carta Fundamental estableció que las causales de reserva o secreto a la publicidad serían contempladas en una ley de quórum calificado es que se dictó la Ley de Acceso a la Información (“Ley de Transparencia”), que reconoció expresamente el “*derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado*” como asimismo “las excepciones a la publicidad de la información”²¹. Una de las excepciones establecidas fueron las “*causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información*”²². La causal relativa a los derechos señala que la denegación tendrá lugar “[c]uando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”²³.

Otras normas del aludido cuerpo legal confirman la exclusión de los derechos de las personas del alcance del acceso a la información. El artículo 5° —norma que aplica tanto a la “Transparencia Activa” como al “derecho de acceso a la información” (Transparencia Pasiva)— afirma que “[e]n virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación,

¹⁹ El Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho de acceso a la información está implícitamente reconocido en el contenido de la libertad de opinión y de información. Sentencia Tribunal Constitucional, Rol 1990-11, c. 25, jurisprudencia que se ha ido confirmando en otros fallos, tales como el Rol 2153-11.

²⁰ Constitución Política de la República, artículo 8, inciso 2.

²¹ Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, artículo 1 inciso 1°: “*La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado (...) y las excepciones a la publicidad de la información*”.

²² Ley N° 20.285, artículo 21.

²³ Ley N° 20.285, artículo 21 N° 2.

son públicos, *salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado*". En sentido análogo se pronuncia el inciso segundo de la misma disposición legal²⁴.

Similar limitación a la publicidad prescribe el artículo 10°, cuyo inciso primero reconoce a toda persona el "derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley". El inciso segundo especifica el ámbito de aplicación del derecho de acceso, haciendo salvedad respecto de "las excepciones legales"²⁵, dentro de las cuales la referida ley prevé "los derechos de las personas" en general y, en particular, la esfera de su vida privada.

En lo referido al estricto ámbito del derecho de acceso, el análisis del contexto de esta ley lleva a la misma conclusión que se ha observado desde la aislada observación de su texto en cuanto a que —bajo el marco de la Constitución— la Ley de Transparencia parece haber situado al derecho a la intimidad fuera de la órbita de alcance del acceso público, al concebir a los derechos de las personas en general y a la intimidad en especial, como excepciones tanto al principio de publicidad de los órganos del Estado y al derecho de acceso a la información de los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos adoptados por la Administración del Estado.

En la hipótesis que algún dato de la vida privada sea parte de un *acto, resolución* o del *fundamento* de estos, el caso habrá de resolverse prudencialmente de conformidad con el principio de divisibilidad establecido por la Ley de Transparencia, "*conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda*"²⁶, considerando además que dicho texto legal encomendó al Consejo para la Transparencia la función de "*[v]elar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado*"²⁷.

²⁴ Ley N° 20.285 de 2008, artículo 5 inciso 2°: "*es pública (...) toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas*".

²⁵ Ley N° 20.285 de 2008, artículo 10 inciso 2°: "*El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales*".

²⁶ Ley N° 20.285 de 2008, artículo 11 letra e).

²⁷ Ley N° 20.285 de 2008, artículo 33 letra j). La letra m) añade: "*[v]elar por el adecuado cumplimiento de la ley (...) de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la*

En cuanto a una supuesta facultad genérica a conocer asuntos que el receptor estime de relevancia pública, hay derechos, como el relativo a la intimidad (vida privada), cuyo reconocimiento supone entender que hay aspectos de la realidad de las personas que quedan al margen del derecho a la información.

Si el derecho a la información no supone la exigencia a una persona natural (periodista) o jurídica (empresa informativa) de entregar determinadas informaciones, ¿presenta alguna operatividad práctica un eventual derecho a exigir la recepción de aquella información que ya ha sido entregada por los medios? Por cierto, un derecho de tal naturaleza debería garantizar que la información que ha sido difundida por los medios de comunicación llegue, sin interferencias, a los destinatarios de la misma, sea a través de la materialidad de periódico en el caso de la prensa escrita, sea mediante la recepción de las ondas emitidas a través del espectro radio eléctrico. Por ejemplo, un televidente que sufriera interferencias imputables a una señal de radio F. M. que le impidiera ver los programas emitidos a través de su aparato tendría acción para hacer valer su derecho a recibir, sin interferencias, las informaciones ya difundidas por la televisión. Esto sucedió en la vida real en el caso denominado “Radio Lanco F. M.”, aunque se resolvió por la vía del derecho de propiedad, como derecho de goce de transmisiones televisivas²⁸.

Hay otros dos interesantes casos que recogen la noción de que no cabe hablar de un derecho a la información en cuanto facultad de exigirla a terceros. En 1984, dos dirigentes de un partido político chileno interpusieron una acción de protección contra Televisión Nacional de Chile, fundado en una solicitud previa para que tal estación televisiva cubriera una manifestación pública convocada por el entonces conglomerado opositor —la Alianza Democrática— al gobierno autoritario. Atendido que el canal recurrido denegara dicha solicitud, los recurrentes estimaron que dicho canal de televisión había vulnerado el derecho fundamental de los recurrentes a la Igualdad ante la Ley (artículo 19 n° 2), y a la libertad de información (artículo 19, n° 12).

Administración del Estado”.

²⁸ Corte de Apelaciones de Valdivia, “Pellet Pardo, Juana y otros con Radio Lanco F.M.”, 29 de noviembre de 1993, confirmada por la Corte Suprema el 15 de diciembre de 1993, *Revista de Derecho y jurisprudencia*, T. 91, n° 2, 2ª parte, secc. 5ª, pp. 80-86.

La Corte de Apelaciones desestimó el recurso en base al derecho de propiedad de los medios de comunicación. Sostuvo que *“no parece que el rechazo formulado por el canal de televisión a esta solicitud pueda constituir una perturbación o amenaza a la garantía constitucional en comento, ya que de aceptarse esta tesis se llegaría a consecuencias impredecibles, como es de que cualquier empresa propietaria de algún medio de comunicación pudiera ser obligada a difundir opiniones, fuese ello a título gratuito o aun a título oneroso, lo que, de ser aceptado, perturbaría el derecho de propiedad de aquella empresa”*²⁹.

La sentencia agregaba: *“No puede pretenderse que la libertad de emitir opinión o de informar signifique el derecho o la facultad para exigirlo compulsivamente a un medio de difusión o de comunicación; facultad que sólo en casos excepcionales y en virtud de textos legales expresos se encuentra reglada y autorizada”*³⁰. Uno de estos casos excepcionales a que alude la sentencia era la entonces vigente Ley de Abusos de Publicidad, que contemplaba el derecho de las personas que habían sido injustamente aludidas por un medio de comunicación a rectificar la información erróneamente publicada en el mismo medio que incurrió en el error.

Hace algunos años (2004), en el caso llamado *“Spots del Sida”*, la Corporación de la Universidad Católica Televisión, junto a otros canales, Megavisión y Universidad Católica de Valparaíso, se negaron a difundir spots publicitarios creados por el Ministerio de Salud con el propósito de informar sobre los medios de prevención de contagio del SIDA universalmente aceptados. Los recurrentes afirmaban que la decisión de los medios de no transmitir tal publicidad privaba, perturbaba y amenazaba *“a los ciudadanos de la igualdad ante la ley, del derecho a la información”*³¹, entre otros derechos, y solicitaban que se obligara a los canales a transmitir la referida información. Los medios de televisión fundamentaron su negativa en que dicha campaña no se conformaba con los valores y principios editoriales que los inspiraban, dos de los cuales decidieron difundir gratuitamente spots informativos sobre el mismo asunto, pero conforme a los valores de su línea editorial y durante el mismo período en el que se transmitió la publicidad del gobierno.

²⁹ Corte de Apelaciones de Santiago, “Hamilton Depassier, Juan y otros con Corporación de Televisión Nacional de Chile”, 3 de enero de 1984, confirmada por la Corte Suprema, 13 de marzo 1984, *Revista de Derecho y jurisprudencia*, T. 81. n° 1, secc. 5ª, pp. 71-73.

³⁰ *Ibidem*, c. 6º.

³¹ Corte Suprema, “Corporación de Promoción y Defensa del Pueblo; con Corporación de la Universidad Católica de Chile; Universidad Católica de Valparaíso; Megavisión S.A.”, 24 de mayo de 2004, c. 1º.

La Corte rechazó el recurso sobre la base de que (a) *“en el país existe para los canales de televisión libertad programática, a raíz de lo cual los canales de televisión abierta son libres de transmitir los contenidos que estimen convenientes, respetando la normativa vigente y (...)”* (b) *“que en la contratación de la publicidad por parte de los canales de televisión impera el principio de la autonomía de voluntad, de modo que los canales no tienen ningún deber legal de transmitir los spots publicitarios requeridos por la autoridad administrativa o los particulares”*³². Agregó el tribunal que (c) la negativa en transmitir los spots tampoco *“constituyen restricciones en la circulación libre de las ideas y opiniones y la imposición arbitraria de información, puesto que en la especie las recurridas se ha limitado a ejercer su derecho a aceptar o rechazar los spots publicitarios ofrecidos como contenido a contratar por el emisor”*³³.

Otro caso relevante sobre libertad de información tuvo lugar ante la justicia constitucional especializada en 1988, al recurrirse ante el Tribunal Constitucional para que ejerciera el control de constitucionalidad de una norma que imponía a todos los canales de televisión la obligación de mantener una señal abierta para exhibir gratuitamente propaganda política en momentos en que se discutía el proyecto de ley que modificaba las disposiciones relativas a la propaganda electoral contenidas en la Ley n° 18.700. El Tribunal Constitucional resolvió que:

*“(...) las limitaciones que se establecen para los canales de televisión de libre recepción ni se circunscriben sólo a la propaganda electoral, esto es a la acción dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito ya que así define el concepto propaganda la ley 18.700. Que precisado lo anterior, el problema consiste en resolver si estas obligaciones y limitaciones que el proyecto impone a los canales de televisión de libre recepción sólo en aquellas oportunidades en que se realicen procesos electorales y plebiscitarios y con el exclusivo propósito de contribuir a conseguir la plena igualdad de todas las personas en la participación en los procesos señalados, infringen la preceptiva constitucional, ya sea por crear una discriminación arbitraria en su contra, por conculcar su libertad de información, o en fin, por vulnerar el derecho de propiedad sobre sus bienes”*³⁴.

Agregaba la sentencia que *“un análisis de las normas constitucionales y legales que han regido el derecho a operar canales de televisión en Chile demuestra, con claridad, que nuestro ordenamiento jurídico ha sido extremadamente exigente y cauteloso en*

³² *Ibidem*, c. 8°.

³³ *Ibidem*, c. 11°.

³⁴ Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 569, de agosto de 1988, c. 6° y 7°.

*la regulación de este medio de comunicación social, restringiendo la titularidad del derecho sólo a determinadas instituciones, por una parte, y dejando testimonio, por la otra, que en el cumplimiento de sus funciones deberán estar siempre presentes, de manera muy especial, los intereses generales de la colectividad*³⁵. Añade que “*por lo dicho anteriormente, se deriva una conclusión: los canales de televisión cumplen una verdadera función de utilidad pública y como lo dice el artículo 1 de la Ley nº 17.377, como medio de difusión han de servir para comunicar e integrar al país*”³⁶.

La sentencia, en definitiva, estimó constitucional el proyecto de ley, habida consideración de (a) la función de utilidad pública que cumplen los canales de televisión, lo que en gran medida justifica la carga de ceder la señal por la circunstancia de (b) gozar los medios de televisión del privilegio de “monopolizar” la información televisiva.

¿Cómo es posible justificar en este caso un deber jurídico por parte de los medios de informar a la población en circunstancias que hemos sostenido la improcedencia de un derecho a la información? Creemos que de la aceptación de una hipótesis no se sigue la adopción de la otra. Se trata de dos asuntos diversos. Estimamos que la carga que pesa en este caso sobre los medios televisivos no se traduce en una imposición de transmitir, entre muchas, sólo una perspectiva respecto de un asunto de relevancia pública —como es el caso de los “*Spots del sida*”—, sino que una pluralidad de mensajes políticos que buscan tener representación parlamentaria o gubernamental.

Al ser obligados a ceder por un espacio de tiempo la señal de que gozan, los medios televisivos ven limitados su derecho de propiedad antes que su libertad de informar. Esta se ve lesionada cuando se impone un mensaje oficial o unilateral, que la línea editorial del medio puede no compartir, objeción que no resulta posible al imponer la ley la difusión de una información que, por su naturaleza, no puede calificarse de oficial ni unilateral. Sí cabe hablar de una limitación al derecho de usar y gozar de la señal de televisión de que disponen, asunto más discutible atendido el carácter de bien nacional de uso público de tal señal televisiva.

Otro aspecto interesante es que en ocasiones la frontera entre la opinión y la información es de difícil determinación, pues en los hechos la información suele contener opinión y la opinión suele contener alguna base

³⁵ *Ibidem*, c. 8º.

³⁶ *Ibidem*, c. 10º.

de información. “La mera presentación de una estadística o encuesta, información si se quiere, puede constituir una opinión en tanto selección a divulgar y discurso articulado hacia un juicio subjetivo no explicitado”³⁷.

2. “(...) Sin censura previa”

Una de las cualidades que hace que la libertad de expresión sea verdaderamente libre es la prohibición de censura previa en la difusión de lo que se quiere comunicar. El Convenio Europeo de Derechos Humanos da algunas luces para entender lo que tal prohibición significa, a saber, la “libertad de (...) comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas”³⁸ previo a la exteriorización de las mismas. Este impedimento de control previo a la difusión de las comunicaciones es lo que habilita la posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades a posteriori. Dicho de otro modo: la razonabilidad del sistema de irresponsabilidad ex ante descansa en gran medida en la posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades ex post.

Lo que la prohibición de censura previa admite, por otra parte, es la posibilidad de que una persona resulte lesionada en ciertos derechos por el abuso de la libertad de expresión de otro. La idea subyacente aquí es que resulta preferible el abuso de la libertad que los efectos derivados de la carencia de ella. Creemos en la validez general de esta proposición, aunque estimamos que el tenor categórico de la misma debe ser matizado con el principio de que los daños serios e irreparables deben ser prevenidos siempre por el Estado.

³⁷ Bronfman, Martínez y Núñez (2012). *Constitución Política Comentada, Parte Dogmática*. Santiago: Abeledo Perrot, p. 267. En la nota al pie 257, se cita un fallo que exhibe que una opinión puede ser también información: “Así lo señala una sentencia de la Corte Suprema de 15 de febrero de 2000, que resuelve un recurso de queja interpuesto por el Ministro Servando Jordán López, en contra de la sentencia dictada por la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: ‘Que en orden a resolver el dilema antes planteado, debe tenerse presente que un artículo claramente informativo es aquel que da hechos acaecidos y susceptibles de ser posterior y objetivamente corroborados, como sucede, por ejemplo, si se relata la forma en que se produjo un accidente de tránsito. Por su parte, un artículo claramente de opinión son las editoriales de los diarios. Entre ambos extremos, esto es, entre la descripción de hechos y la emisión de juicios valoricos u opiniones subjetivas, se extiende una zona dudosa que exige matices más finos. La pregunta central es si, en caso de alguien emita públicamente una opinión injuriosa en contra de otro, el reproducir esa opinión es un acto informativo u opinante. En opinión de esta Corte, tal reproducción de las opiniones vertidas por un tercero es, claramente, un acto de información, en donde el hecho informado son, precisamente, las expresiones vertidas por ese tercero. En tal sentido, una reproducción de esas opiniones es informar y no opinar (considerando 14)’”.

³⁸ Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), artículo 10.

No podría ser de otro modo: si la opción constitucional por el sistema de responsabilidades ulteriores descansa precisamente en excluir las preventivas con tal de hacer efectivas las posteriores, sería contrario a la lógica de tal diseño admitir la posibilidad de generar lesiones que —aunque siempre podrán ser reparables por equivalencia— resulten a la postre difícilmente reparables in natura atendida la fragilidad del derecho vulnerado³⁹.

En aquellos casos en que la única modalidad reparatoria del daño a un derecho fundamental de la personalidad es la indemnizatoria, no queda sino admitir la vía preventiva para impedir la afectación en su esencia del derecho fundamental vulnerado. De ahí que pensemos que la libertad de expresión no puede implicar la imposibilidad, de una vez y para siempre, en prevenir las lesiones irreparables de su ejercicio abusivo.

La prohibición de censura previa no supondría entonces una prohibición a la autoridad judicial para prevenir la realización de daños irreparables a los derechos fundamentales de otros, tales como la protección a los menores o adolescentes de ciertas expresiones nocivas para su formación, como lo reconoce el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969)⁴⁰, declaraciones de derechos que autorizan la censura previa para los espectáculos públicos, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Igualmente, creemos que el Estado está obligado a resguardar aquellos aspectos del bien común que inevitablemente limitan el ejercicio de algunos derechos con el fin de asegurar un marco necesario para disfrutar de los mismos derechos en su conjunto, toda vez que un aspecto esencial del bien común está constituido por la efectividad de los derechos humanos⁴¹.

No parece consistente con un Estado Democrático de Derecho excluir *a priori* la intervención judicial en la tutela de los derechos fundamentales en los casos de daño inminente a ciertos derechos cuya vulneración implicaría dejarlos desprotegidos respecto del acto concreto que se objeta. Si bien

³⁹ Hay casos de ciertos derechos que no admiten ningún grado de afectación sin la “muerte” del mismo derecho lesionado. El ejemplo más evidente es el derecho a la vida.

⁴⁰ Convención Americana de Derechos Humanos (1969), artículo 13.4: “*Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2°*”.

⁴¹ Finnis, John (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press, pp. 215-218.

esta proposición podría dar pie a que en casos determinados se pudieran dictar resoluciones injustas, por ejemplo, prohibir al escritor o cineasta la difusión de su obra, por el otro lado, una interpretación aislada de la prohibición de censura previa y que se hiciese extensiva a los tribunales de justicia dejaría a la judicatura en la imposibilidad de proteger los derechos de otras personas, tan valiosos como los del escritor o cineasta⁴². Abrigamos serias dudas sobre la existencia de una injusticia en la censura previa de una información cuando esta es, al mismo tiempo, injusta con los derechos de los demás⁴³.

Un buen ejemplo del rol tutelar de los derechos y preventivo de daños en materia judicial es el caso *Impunidad Diplomática*, en que un periodista escribió un libro en el que denuncia las actividades desarrolladas por el entonces embajador de la Nación Argentina en Chile y las causas de su salida del cargo, las que atribuye, entre otras, a las conductas viciosas del mismo. Uno de los afectados interpone una acción de protección ante los tribunales de justicia, con el fin de impedir la internación del libro ya publicado en Argentina, los que en ambas instancias resuelven prohibir la internación del mismo, fundado en que el contenido de aquel lesionaba la vida privada y vulneraba la honra de las personas individualizadas. El autor del libro se oponía a tal medida cautelando reclamando el carácter absoluto de la libertad de expresión, lo que a su juicio, convertía en ilegítima cualquier medida judicial preventiva.

La Corte Suprema resolvió que reconocer la existencia de un sistema de responsabilidades ulteriores no excluye la adopción de medidas judiciales preventivas de un daño que, en caso de llegar a consumarse, sería irreparable. En efecto, la sentencia afirma que “*la circunstancia de contener el ordenamiento jurídico medios encaminados a sancionar la vulneración de derechos garantizados y reparar los daños que se causen por ello, no es óbice para que se interponga y acoja esta acción tutelar y de rango constitucional*”, y añade que ello se justifica toda vez que “*la procedencia de la acción de la protección ante la sola amenaza, se afirma al considerar que los valores en cuestión son por su naturaleza de tal índole que el solo inicio de su vulneración genera daños imposibles de reparar en términos equivalentes*”.

⁴² García-Huidobro, Joaquín; Martínez Estay, José Ignacio, y Núñez, Manuel Antonio (1997). *Lecciones de derechos humanos*. Edeval, p. 181.

⁴³ *Ibidem*, p. 184.

al bien que significa su respeto para quien los posee y requiere conservarlos íntegros e inviolados”⁴⁴.

Otro emblemático caso tuvo lugar con ocasión de la película *La última tentación de Cristo*⁴⁵, filme cuya internación y exhibición fue prohibido por resolución judicial incoada en virtud de una acción de protección interpuesta por un grupo de abogados que sostuvieron, fundamentalmente, la amenaza y vulneración del derecho a la honra en la persona de Jesucristo y de sus seguidores, los cristianos, al retratarlo “*un tanto histérico, y, sobre todo, patético, (...) mentiroso, un cobarde, que su Dios es el temor, y que si no mata, no roba, no es porque teme hacerlo (...) su personalidad insegura, dominada por Judas, su pobre expresión oral y su sensiblería sólo permiten dar una imagen absurda y rebajada del ser*” que para muchos significa. El fallo describe que otras escenas muestran a Jesucristo teniendo una relación sexual con María Magdalena y teniendo descendencia tanto con María como con Marta⁴⁶.

Aunque con argumentos distintos a los que fundan la sentencia⁴⁷, comparto el resultado de la misma, esto es, la censura previa a su exhibición por estimar grave e irreparable el daño que de su difusión se seguiría para la imagen y honra tanto de Jesucristo como de sus seguidores. Para muchos la veneración y respeto que se tiene hacia Jesucristo⁴⁸ sólo resulta comparable con la que tienen los hijos respecto de sus padres, toda vez que no puede ponerse en duda que para muchos cristianos existe una filiación divina

⁴⁴ Corte Suprema, “*Andrónico Luksic Craig y otros con Editorial Planeta S.A.*”, 15 de junio de 1993, rol n° 21.053, c. 2° y 4°, respectivamente.

⁴⁵ Corte Suprema, “*Sergio García Valdés y otros con Consejo de Calificación Cinematográfica*”, 17 de junio de 1997, rol n° 519-1997.

⁴⁶ *Ibidem*, c. 7°.

⁴⁷ El fallo sostiene que “*el problema se plantea en si es posible, en aras de la libertad de expresión, deshacer las creencias serias de una gran cantidad de hombres*”. Disentimos de este argumento, toda vez que la cuestión central no estriba en si (a) se deshacen o no las creencias de otros o (b) si los afectados son una mayoría o minoría. Las creencias o religiones pueden legítimamente ser contravenidas y los personajes históricos cuestionados. El punto reside en si es legítimo valerse del empleo de la ficción para enlodar la reputación de las personas cuyas creencias religiosas resultan indubitadas. Distinto sería el caso de una investigación histórica que afirmara ciertos vicios –hasta entonces desconocidos– de un personaje histórico o héroe nacional. No sostenemos la ilegitimidad de la novela o ficción, sino su falta de aptitud para lesionar la reputación de terceros. Si se trata de una investigación académica seria y documentada que pretende dar a conocer la vida de un personaje histórico, la lesión resulta en casos justificada por la veracidad o verosimilitud del relato.

⁴⁸ Argumento que parcialmente recoge el fallo al reconocer que la figura de Cristo o Jesucristo, como es de público y notorio conocimiento, es venerada por la mayor parte de la población del país, *ibid.*, c. 8°.

de Jesucristo y Marta respecto de sus hijos espirituales, realidad que no por ser inmaterial, tiene que ser ignorada. ¿Quién aceptaría como lícita la publicación de una novela que —so pretexto de ser ficticia— exhibiera a nuestros padres en un retrato degradante?

Si el anterior resulta un argumento insuficiente para algunos, creemos que lo central estriba en lo siguiente: existe un cierto acuerdo en que la libertad de expresión no admite la entrega de información, a sabiendas, falseada. Estaría, por tanto, legitimada la divulgación de errores o inexactitudes en que se haya incurrido empleando algún grado de diligencia. Si esto es así, estimamos que la mayor dificultad para determinar en qué medida puede ser legítima la difusión de un obra que contenga información a la vez verdadera y ficticia está en ponderar el grado de ficción contenido en conjunción con los elementos verdaderos, pues, en ocasiones, es probable que la deformación del personaje real-ficticio sea de tal envergadura que el resultado final sea una deformación de la realidad asimilable a la falsedad intencionada.

Si no es posible lesionar la honra de una persona con informaciones falsas, tampoco creemos que es lícito hacerlo cuando se trata de lograr el mismo resultado respecto de la misma u otra persona con información que, aunque ficticia, resulte abiertamente deformada respecto de alguien. Y tratándose de una obra de teatro o novela en que el cuadro final es el descrito, la falta de malicia resulta difícilmente argumentable en el contexto de un trabajo que, por su naturaleza, no puede sino ser concebido con tiempo. Se trata de impedir que bajo el ropaje de una novela u obra artística se esconda el propósito de enlodar la vida de una persona, mezclando realidad y ficción de modo tal que el manejo ficticio implique a la postre un falseamiento, por ejemplo, de la realidad histórica⁴⁹.

Como ya lo adelantáramos, el punto reside en si es legítimo valerse del empleo de la ficción para enlodar la reputación de las personas cuyas creencias religiosas resultan tan sensibles como indubitadas. Distinto sería el caso de una investigación histórica que afirmara ciertos vicios —hasta

⁴⁹ Corte Suprema, “Undurraga Abbot, Claudio con Universidad de Chile y otros”, 16 de julio de 2003, rol. n° 1961, caso que falla el recurso de protección interpuesto contra una obra de teatro cuyo protagonista principal es un héroe naval nacional, Arturo Prat. El fallo afirma que “la presentación de la figura de Prat en la forma en que lo muestra la autora, constituye un claro esfuerzo denostatorio de la persona del héroe, con lo que se ha pretendido deshonrar a su familia y por qué no decirlo, aunque sea ajeno al objetivo del recurso, herir el sentimiento patrio”, c. 4.

entonces desconocidos— de un personaje histórico o héroe nacional. No sostenemos la ilegitimidad de la novela o ficción, sino su falta de aptitud para lesionar la reputación de terceros. Si se trata de una investigación académica seria y documentada que pretende dar a conocer la vida de un personaje histórico, la lesión resulta en ocasiones justificada por la veracidad o verosimilitud del relato.

Por último, y aunque el fallo no desarrolla adecuadamente este punto, se encuentra el derecho a no ser discriminado por causa de la raza, color, condición social. Muy pocos defenderían el derecho a la libre creación artística de una película que ridiculizara a una persona por su color, raza o condición social. No diviso de qué modo ello resultara legítimo tratándose de la religión en circunstancias que el derecho a no ser discriminado se extiende a no ser agraviado por las creencias religiosas que se profesan. Resulta insuficiente argumentar que si alguien considera que una película es ofensiva para sus creencias, lo que debe hacer es abstenerse de verla. Como alguien ha dicho: *“si coloco en la puerta de mi casa un cartel afirmando que ‘el budismo es una estupidez’, no es suficiente excusarme diciendo ‘si usted no quiere, no lo lea’, o ‘discierna usted si está o no de acuerdo conmigo’; se trata de una ofensa objetiva, que pulveriza el derecho del budista a no ser ridiculizado, vejado o insultado”*⁵⁰.

3. “(...) En cualquier forma y por cualquier medio”

Las formas en virtud de las cuales se pueden ejercer las libertades de opinión y de información podrían perfectamente omitirse por estar contenida en la primera parte de la oración de este derecho. Se refiere a las modalidades externas, determinadas por quien lo manifiesta, que puede revestir la opinión o información, ya sea a través de un ensayo, novela, poesía, una crítica, una imagen, un dibujo, un símbolo, una caricatura, una editorial, una imagen audiovisual o filme, entre otras.

Los medios por los que se pueden ejercen estas libertades se refieren al soporte que adopta la opinión o la información, esto es, el sustrato material por las cuales se transmiten, manifestación que puede darse a través de la prensa escrita, la televisión, la radio, internet, películas de cine, cintas

⁵⁰ Madrid, Raúl, “El Estado no puede elegir por los individuos”, en *Consideraciones sobre una película*, Diario El Mercurio, cuerpo E, Artes y Letras, domingo 24 de noviembre de 1996, p. 19.

de video, discos compactos, teléfonos móviles o cualquier aparato que cuente con la aptitud necesaria para difundir opiniones u informaciones que existan en la actualidad y los que a futuro se inventen. Aun cuando la Constitución de 1980 se refiere a la prensa, radio y televisión, dejó abierta la posibilidad de contemplar otros medios que no menciona.

Será el emisor quien elegirá la forma y el medio de dar a conocer la opinión o información suya o de otros. Primero determinará la forma, si es por medio de palabras escritas o en forma oral, si consistirán en imágenes, en colores, símbolos, sonidos, su extensión, si será serio u humorístico, irónico, entre otras. Determinada la modalidad o forma, definirá el medio para dar a conocer su información u opinión, que podrá ser oralmente en una reunión pública, emitido en un programa de televisión, de radio o publicado en la prensa escrita⁵¹.

4. “(...) Sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, que deberá ser de quórum calificado”

Lo que contempla la norma constitucional ya citada es un sistema de responsabilidades ulteriores, denominado equívocamente por alguna doctrina y jurisprudencia como sistema represivo. Significa que la responsabilidad en el ejercicio de las libertades de opinión e información se genera a partir del momento de la publicación o difusión de las mismas, concepto que armoniza con la prohibición de la censura previa administrativa. Esto sin perjuicio de la posibilidad de que los tribunales decreten medidas judiciales preventivas (medidas cautelares) con el fin de prevenir la ejecución de un ilícito constitucional o de impedir la repetición del mismo.

Lo anterior importa que no puede configurarse un delito cometido a través de un medio de comunicación, si la opinión o información no ha sido publicada o exhibida. El sentido de la norma al respecto es categórico. La salvedad resulta entonces plenamente compatible en caso que la justicia, previa interposición de una acción de protección, determine la existencia de una amenaza seria de vulneración a un derecho fundamental, pues, en tal evento, (a) la interposición de tal acción cautelar de naturaleza

⁵¹ Anguita, op. cit., p. 59.

constitucional no irroga responsabilidad alguna —sanción penal o civil al afectado con tales medidas—, no produciéndose el efecto indeseable que la norma constitucional pretende expulsar del ordenamiento jurídico⁵² (la restricción previa con efectos sancionatorios), y (b) una medida judicial cautelar resulta no sólo plenamente justificada, sino que indispensable, toda vez que cualquier medida a posteriori resultaría —aunque susceptible de reparación por equivalencia— insuficiente por el carácter grave y particular del daño inminente, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de la revelación pública de hechos íntimos cuya difusión no esté justificada por concurrir un interés público.

Un criterio similar al señalado fue el aplicado por la jurisprudencia al fallar el recurso de protección que se pronunció en el caso denominado “Impunidad Diplomática”. La Corte Suprema sostuvo que *“la circunstancia de contener el ordenamiento jurídico medios encaminados a sancionar la vulneración de los derechos garantizados y reparar los daños que se causan por ello, no es óbice para que se interponga y acoja esta acción tutelar de rango constitucional”*. A mayor abundamiento agregó que *“la procedencia de la protección ante la sola amenaza, se afirma al considerar que los valores en cuestión son por su naturaleza de tal índole que el solo inicio de su vulneración genera daños imposibles de reparar en términos equivalentes al bien que significa su respeto para quien los posee y requiere conservarlos íntegros e inviolados”*⁵³.

⁵² Si lo que se pretende es no imponer responsabilidades civiles o penales preventivas, no se divisa de qué modo tal impedimento sea extensible a la responsabilidad preventiva constitucional, cuyo objetivo no es sancionatorio -corporal, ni reparatorio- pecuniario, sino simplemente *“restablecer el imperio del derecho”*, evitando la consumación del ilícito constitucional o su reiteración. La configuración del ilícito vulnerador de la vida privada, no exige, en sede constitucional, la exigencia verificadora que es propia, por ejemplo, de un ilícito penal.

⁵³ Corte Suprema, *“Andrónico Luksic Craig y otros con Editorial Planeta S.A.”*, 15 de junio de 1993, rol n° 21 .053, c. 2° y 4°, respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA CITADA:

Anguita Ramírez, Pedro (2005). *El derecho a la información en Chile: análisis de la Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (Ley de Prensa)*. Santiago: Lexis Nexis.

Aristóteles (1993). *Política*. Barcelona: Altaya.

Barry, Brian (1965). *Political Argument*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bronfman, Alan; Martínez, José Ignacio y Núñez, Manuel (2012). *Constitución Política Comentada, Parte Dogmática*. Santiago: Abeledo Perrot.

Cea Egaña, José Luis (1976). *La libertad de opinión y el derecho a la información*. Santiago: mimeo, segunda edición.

Constitución Política de la República.

Convención Americana de Derechos Humanos. 1969.

Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1950.

Covarrubias Cuevas, Ignacio (2008). “Libertad de información y derecho a la vida privada: la perspectiva jurisprudencial chilena”. En Julián Rodríguez Pardo (coord.), *Derecho de la Información. Una perspectiva comparada de España e Iberoamérica*. Madrid: Editorial Dykinson-Universidad de Extremadura.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948.

Finnis, John (1980). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press.

García-Huidobro, Joaquín; Martínez Estay, José Ignacio, y Núñez, Manuel Antonio (1997). *Lecciones de derechos humanos*. Edeval.

Madrid, Raúl, “El Estado no puede elegir por los individuos”, en *Consideraciones sobre una película*, Diario El Mercurio, cuerpo E, Artes y Letras, domingo 24 de noviembre de 1996, p. 19.

Mill, John Stuart (1991). *Sobre la libertad*. México: Gernika.

Nogueira Alcalá, Humberto (2002). *El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites*. Santiago: Lexis Nexis.

NORMAS CITADAS:

Ley N° 18. 838, que crea el Consejo Nacional de Televisión.

Ley N° 19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, del 2008.

JURISPRUDENCIA CITADA:

Hamilton Depassier, Juan y otros con Corporación de Televisión Nacional de Chile (1984): Corte Suprema, 13 de marzo de 1984, Revista de Derecho y jurisprudencia, T. 81. n° 1, secc. 5ª, pp. 71-73.

Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 569, de agosto de 1988.

Andrónico Luksic Craig y otros con Editorial Planeta S.A. (1993): Corte Suprema, 15 de junio de 1993, Rol N° 21.053.

Pellet Pardo, Juana y otros con Radio Lanco F.M. (1993): Corte Suprema, 15 de diciembre de 1993, Revista de Derecho y jurisprudencia, T. 91, n° 2, 2ª parte, secc. 5ª, pp. 80-86.

Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 226, 30 de octubre de 1995.

Sergio García Valdés y otros con Consejo de Calificación Cinematográfica (1997): Corte Suprema, 17 de junio de 1997, Rol N° 519-1997.

Undurraga Abbot, Claudio con Universidad de Chile y otros (2003): Corte Suprema, 16 de julio de 2003, Rol N° 1961.

Corporación de Promoción y Defensa del Pueblo; con Corporación de la Universidad Católica de Chile; Universidad Católica de Valparaíso; Megavisión S.A. (2004): Corte Suprema, 24 de mayo de 2004.

Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 1990-11.

Sentencia Tribunal Constitucional, Rol N° 2153-11.